

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Arteaga*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*José García Ramirez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 11 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el C. Lic. José María Toro, en representación de su padre político D. Manuel Toro, contra el veredicto del H. Congreso del Estado, de fecha 12 de Noviembre de 1868 y la resolución de la Corte de Justicia del mismo, de 24 de Diciembre del mismo año.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El que suscribe, como Promotor Fiscal que lo es por impedimento del propietario y del Jefe superior de Hacienda, dice: que el C. José María Toro, en su escrito de 20 de Marzo último solicita el amparo de la Justicia Federal á nombre de Manuel J. Toro, tesorero que fué de las rentas del Estado, respecto al veredicto que el Congreso y Corte de Justicia del mismo Estado, erigidos en Jurados de acusación y sentencia pronunciaron imponiendo á este varias penas por los varios capítulos de acusación que en su contra formuló el gobier-

no del Estado en el año de 1868. El recurso no se refiere á todos y cada uno de los puntos que fueron objeto de dicha sentencia, sino solo al que versa acerca de responsabilidades contraídas en la enajenación que el expresado Toro hizo de algunos bienes nacionales en beneficio suyo y de sus deudos por interpósitas personas y en cuyas operaciones intervino con el carácter de Jefe de Hacienda ó comisionado para desamortización de los bienes nacionalizados por decreto expedido por el Cuartel general de la línea de Oriente en 10 de Marzo de 864.

Sus fundamentos se reducen, á que habiendo hecho las enajenaciones expresadas como empleado accidental de la Federación, los abusos que en ellas pueda haber cometido, no debieron ser juzgados por otros Tribunales ni por otras leyes que las federales, y que sin embargo, el mencionado Toro lo fué por autoridades del Estado y conforme á sus leyes particulares, de donde infiere que en su persona fué violada la garantía del art. 14 de la Constitución Federal que manda, que nadie sea juzgado sino por tribunales previamente establecidos y por leyes exactamente aplicables al caso.

El apoderado de Toro, haciéndose cargo de la dificultad que resulta del art. 89 de la ley de 20 de Enero de 869, que prohíbe el recurso de amparo respecto de los actos judiciales, promovió prueba para justificar que antes de que dicha ley se expidiese se había promovido ya el mismo recurso, cuyos antecedentes no aparecen en el archivo del Juzgado: al menos esto es lo que comprendió el que suscribe que pretendía en su escrito relativo y por eso no se opuso, y antes pidió se le concediese un término probatorio, pero en su concepto no era preciso justificar ese hecho, por lo que sin entrar en el exámen de la información que se rindió analizaré la cuestión va-

liéndose de otras ideas que nada tienen que ver con la dificultad que tanto ha dividido á los jurisconsultos mexicanos sobre el modo de conciliar la amplitud que al recurso de amparo da la letra del art. 101 de la Constitucion Federal con la restriccion del art. 8º del decreto de 20 de Enero.

El que suscribe, juzga una verdad indubitable que ni el Congreso ni la Corte de Justicia del Estado, con el carácter de jurados de acusacion y sentencia, debían haber juzgado al ex tesorero Toro por los hechos que quedan referidos, porque aunque se haya dicho en uno de los considerandos de la sentencia pronunciada por la Corte, que los abusos de que fué acusado los cometió como comisionado del Estado, no es cierto que así fuese, porque las facultades que tuvo para intervenir en las operaciones de desamortizacion, no le vinieron por comision del Estado sino por disposicion del Cuartel general de la línea de Oriente, que en esa época representó en el Estado á la Federacion.

Mas esto, que es una verdad generalmente hablando, no lo es con respecto al caso presente, y tomando en consideracion las circunstancias que ocurrieron en el proceso de Toro. La comision del Juzgado de acusacion se encargó, en efecto, de la dificultad, y en el dictámen que presentó á la Cámara reconoció, como reconoce el que suscribe, el fuero á que Toro estaba sujeto por los mencionados abusos, pero ella misma se contestó el argumento, diciendo que Toro habia podido declinar jurisdiccion y no lo habia hecho, sino que antes bien se sujetó expresamente á la del Congreso por interes que manifestó tambien expresamente de vindicarse, con lo que prorogó la jurisdiccion de la Cámara y de la Corte para que se ocupasen de un punto que de otra manera habria quedado fuera de los límites de sus atribuciones.

Con esta conducta, en efecto, quedó salva la garantía del art. 14 de la Constitucion, el cual no debe suponerse que tiene el espíritu de que precisamente se haga uno de otra garantía aun contra la voluntad del que debía gozarla: así es que si Toro, pudiendo, no desconoció la jurisdiccion de las autoridades del Estado, suya es la culpa de haber sido juzgado por ellas. En ello no ve el que suscribe un inconveniente que afecte el derecho público para que por salvarlo deba otorgarse el recurso de amparo que es por su naturaleza extraordinario, supliendo la omision de Toro en usar de los recursos ordinarios.

El art. 14 de la Constitucion general, garantiza á todos los habitantes de la República el derecho de no ser juzgados sino por Tribunales previamente establecidos por la ley, y cuando se procede contra alguno separándose de tal regla, tiene lugar conforme al art. 101 de la misma Constitucion.

Repárese en que esta garantía tiene dos requisitos: Primero: que el habitante de la República sea juzgado por un verdadero Tribunal y no por una autoridad sin potestad de juzgar; y segundo: que ese Tribunal haya sido establecido previamente ó ex post facto. Una autoridad de distinto orden que la judicial, aunque sea previamente establecida, no puede juzgar á nadie sin violar el derecho que garantiza el art. 14, y cualquiera Tribunal organizado despues de la perpetracion del hecho, tampoco puede juzgarlo sin cometer la misma falta contra la seguridad individual; pero si la autoridad que juzga pertenece á los funcionarios judiciales, ó lo que es lo mismo, si tiene un principio de jurisdiccion y su autoridad no ha sido creada despues del hecho, precisamente para juzgarlo, no hay ni puede haber violacion de la garantía constitucional, y aunque pueda haber lugar contra sus procedimientos á los recursos del orden

comun, no puede haberlo de ninguna manera al de amparo.

Y al menos así entiendo el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 69, y así me parece que se concilia la restricción que contiene respecto á los actos judiciales con la amplitud del art. 101 de la Constitución; es decir, que conforme á esas dos disposiciones no hay lugar al amparo contra los actos judiciales propiamente dichos, porque para impedir sus efectos, las leyes comunes otorgan otro género de recursos ordinarios que son también unas garantías sin necesidad de tocar el constitucional del amparo, el cual, si se ampliara aun á esos casos, nulificaría el poder judicial de los Estados, sujetando á todos sus procedimientos y declaraciones á la revisión y aprobación de la Justicia Federal.

Si los actos no son judiciales propiamente dichos, esto es, cuando el que los ejerce no es un Tribunal judicial ó cuando ha sido establecido ex post facto, entonces cabe bien el recurso según la Constitución y á ello no puede oponerse el espíritu y letra del art. 8º de la ley de 20 de Enero. La razón es, porque contra un Tribunal de esa naturaleza no caben recursos ordinarios, los cuales suponen un principio de jurisdicción de que dicho Tribunal se hallaría muy distante.

El Congreso del Estado y la Corte de Justicia, erigidos en jurados de acusación y sentencia, constituían ya el Tribunal Supremo cuando Toro fué acusado, organizados conforme á la Constitución particular para juzgar á los altos funcionarios en sus delitos oficiales, relativos al régimen interior del mismo Estado; luego tenían jurisdicción que, aunque no fuese del mismo género que la que requerían los abusos de que Toro había sido acusado, podía ser prorogada sin inconveniente alguno constitucional como lo fué por consentimiento del mismo Toro. Ese Tribunal existía aun antes de que pasasen los hechos referi-

dos, al menos moralmente, porque en el Estado hay y ha habido Legislatura y Corte de Justicia con facultad de erigirse en jurados de acusación y de sentencia antes del año de 1864, época en que Toro vendió las casas en cuestión. Por consiguiente podría el veredicto que pronunciaron tener otra clase de defectos; pero evidentemente no contiene la violación del art. 14 de la Constitución Federal.

En resumen, la cuestión que ahora se promueve solo tiene lugar respecto á las autoridades que pretenden ejercer ó ejercen actos judiciales con falta absoluta de jurisdicción; pero de ninguna manera puede aplicarse á las que solo son incompetentes para determinado negocio, porque contra la incompetencia de un Tribunal, proceden los recursos de declinatoria ó inhibitoria y no el de amparo. Supuesto que Toro no hizo uso de los recursos ordinarios renunciando así la garantía que por ellos importan, no es procedente que implore ahora el amparo de la Justicia federal por violación de una garantía que él no defendió sino que renunció expresamente. Por lo mismo el que suscribe pide se declare no tener lugar el amparo, y que hecha la declaración se dé cuenta á la Suprema Corte para los efectos legales.

Oaxaca, Octubre de 1872.—*Juan N. Bonilla.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Oaxaca, Octubre 14 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. José María Toro, de esta vecindad, en legítima representación de su padre político D. Manuel José Toro, en cuya persona dice que fué violada la garantía otorgada por el art. 14 de la Constitución de la República, de no poder ser juzgado

ningun ciudadano ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley; que á consecuencia de serias pre-disposiciones de parte del Gobernador del Estado en 1868, por oponerse Toro como tesorero, á los abusos que de los fondos del Erario solicitaba hacer aquel funcionario, fué acusado ante el Congreso del mismo Estado, quien lo juzgó por varios capítulos, y aun por el 4º, reducido á haber rematado Toro en su favor por interpósitas personas bienes nacionalizados que estaban á su cuidado como Jefe superior de Hacienda, y comisario general del ejército de Oriente, segun disposiciones relativas del General en Jefe de esa línea, ampliamente facultado por el Presidente de la República, por su decreto de 26 de Octubre de 1868; visto el informe de la autoridad del Gobierno del Estado encargado inmediatamente de ejecutar el veredicto de la legislatura y el fallo de la Corte de Justicia del Estado, contra Toro, informe que se reduce á remitir en copia las resoluciones de dichos cuerpos políticos, jurados del hecho y del derecho en aquel caso, y á llamar la atencion de este Juzgado sobre si cabe el recurso de amparo en este caso, tratándose de un negocio judicial; vista la prueba del quejoso sobre haber pedido este amparo antes de la ley de 20 de Enero de 1869, que es la que en su art. 8º pretendió limitar así este recurso á violaciones de garantías por actos no judiciales, contra las disposiciones de los arts. 100 y 101 de la Constitución que no ponen límite, ni en caso de violacion de garantías, ni en caso de invasion de poderes; visto el despacho del Tribunal de Circuito, para que este Juzgado de Distrito iniciara competencia á dicho Tribunal del Estado; y el decreto del mismo Juzgado que la inició; y que el decreto relativo quedó ineficaz, no fué comunicado á la Corte

de Justicia porque el Promotor fiscal O. Lic. Sebastian Luengas pidió traslado de aquel despacho y decreto, y que el quejoso nota que el mismo O. Lic. Luengas fué á la vez miembro del jurado de hecho, en consecuencia de lo que falló el de derecho, condenando á pena cierta por el cargo 4º dicho de que antes fué Toro declarado culpable, quedando el juicio terminado, y su ejecución al cargo inmediato del Gobierno del Estado, segun el art. 6º de la segunda de las sentencias con que el mismo Gobierno ha informado; visto que de lo que aparece en los puntos 4º y 5º de la parte resolutive de esa sentencia resulta, que por abuso de los bienes nacionalizados, la Corte de Justicia impuso á Toro pena de multa igual al valor del sueldo que gozaba por año, al mismo tiempo que dispuso consignar á Toro al Juzgado de Distrito con testimonio de todo lo actuado, por lo que toca, dice el 5º art., á los intereses nacionales, y esto reconociendo la parte expositiva de esa sentencia en su consideracion sétima, que á los Tribunales de la Federación, compete declarar nulos los contratos relativos á esos remates, exigir la restitution de las cantidades en que se perjudicara el Erario nacional, y la responsabilidad en que Toro hubiere incurrido, por los delitos que hubiera cometido en virtud de aquellos remates, pues por parte del Estado, dice aquella sentencia, solo se le conceptuaba culpable por la deslealtad con que como *funcionario del Estado desempeñó la comision que se le confiara para administrar los bienes nacionales*; y visto en fin los alegatos del quejoso y que el Promotor fiscal especificó, y que este no pidió sobre lo principal en los tres dias de la ley, no obstante prescribírselo lo hiciera el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, párrafo 2º, sino hasta que alegó; finalmente, cuanto mas ver convino; y teniendo en consideracion: Primero: que el cargo 4º consiste en efecto, en abusos

de los bienes nacionalizados, pues se trata de fincas de este carácter, que se dice que Toro remató en su favor por interpositas personas: Segundo; que el dominio de tales bienes nacionalizados ninguna ley lo atribuyó nunca á las partes integrantes de la Federacion ó Estados confederados, distributivamente: Tercero; que por decreto del cuartel general del ejército de Oriente de 10 de Marzo de 1864, el General en Jefe facultado extraordinariamente por el Presidente de la República, que por su parte lo estaba por el Congreso de la Union, reasumió todo el poder público del Estado, previó un nombramiento de Gobernador, al que, y al mismo Estado, mandó consignar á gastos de guerra los productos de los bienes que la nacion puso en vía de redencion, pagar en moneda la cuarta federal, suprimir las Gefaturas de Hacienda; que la tesorería general del Estado, con el cuartel general practicarán las operaciones de desamortizacion y nacionalizacion, y realizarán todos los créditos de la nacion, siendo comisaría de guerra y administracion principal de papel sellado y correos; y en fin en el reglamento de la misma fecha, que el nombramiento de tesorero y demas empleados de esa nueva oficina general lo hiciera el dicho Gobierno extraordinario, quedando esa instalada para el día siguiente; y que de todo resulta que estos actos, empleados é intereses creados, fueron todos federales, y que las deslealtades del tesorero sobre las que este Juzgado aun no decide ni de otro modo califica, serian en su caso faltas de fidelidad á la confederacion ó á la nacion, aunque antes hubiera sido el mismo Toro, tesorero del Estado, pues que al hacer dichos remates era ya tesorero de la nacion y Jefe de las secciones que creó el dicho reglamento para instalarse al día siguiente: Cuarto; Que la Justicia federal no le fué nunca encomendada á los Tribunales del Estado, ni en el tiempo de la guerra, ni menos en

el del juicio, en cuyo tiempo la nacion habia vuelto al orden legal: Quinto; Que toca á los Tribunales de la Federacion conocer de todas las constancias que se remiten sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes federales, y de aquellas en que la Federacion fuere parte, segun el art. 97, fracs. 1ª y 3ª de la Constitucion federal: Sexto; Que la jurisdiccion privativa no se proroga como la acumulativa, llamada tambien preventiva, cuando aquella se funda como sucede de ordinario en la distribucion del poder público como sucede especialmente en el caso en que se trata de dos entidades políticas, ó la Federacion ó el Estado, que no tienen la una respecto del otro, y este respecto de aquella ningun principio de jurisdiccion, por medio de las personas de sus respectivos jueces, para poder conocer acumulativamente ya de intereses de Federacion, ya de intereses del Estado en virtud de próroga, porque el derecho público, ó la distribucion del poder entre la Federacion y el Estado, no pueden renunciarse, por cuyo motivo ni contestar la demanda, ni omitir salvas y protestas, ni menos declarar ante el juez incompetente, pueden surtir los efectos de esa próroga; lo primero, por los fundamentos antecedentes constitucionales ó de derecho público; y lo último segun las prácticas y doctrinas de los tratadistas (Nuevo Febrero, tom. 3ª, pág. 33 núm. 20) lo mismo pensó la Corte de Justicia, aunque pretendió fundar lo contrario, sin distinguir los poderes federales ó los del Estado, pues falló imponiendo pena por deslealtad respecto del Estado á este empleado de la Federacion reservando á esta castigar la misma responsabilidad, con lo que no vió ya fundada la próroga, que en el mismo cuerpo de la sentencia le pareció demostrada: Séptima; Que está plenamente probado que Toro ocurrió promoviendo este amparo, antes de la ley de 20 de Enero de 1869, con los testimonios de los jueces

propietario y suplente de ese tiempo (fs. 2 y 3, cuad. 2º) y con los del secretario y del ejecutor de este mismo Juzgado refiriéndose el uno á constancias del libro de concimientos de que puso copia certificada (fs. 40 vta. del cuad. pral. y fs. 2 y vta. del cuad. 2º) en estos autos: Octavo; Que en consecuencia, menos en el órden y dilaciones del juicio, debió procederse y debe fallarse segun la ley de 30 de Noviembre de 1861, y conforme á los arts. 101 y 102 de la Constitucion, que conceden amparo *contra leyes y actos de cualquiera autoridad* que violen las garantías individuales: Noveno; Que aun cuando así no fuera, el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, no debe aplicarse con preferencia á los arts. 101 y 102 de la repetida Constitucion general, segun su art. 126 y el 28 de la ley antes relacionada de 1869: Décimo; Que en el caso, y habiendo cesado la accion de la Legislatura y Corte del Justicia, Tribunales competentes para juzgar al tesorero del Estado, pero no al funcionario á quien se imputan aquellos remates, no tienen en el caso el mismo lugar, ni aplicacion las razones de la opinion que excluye los negocios judiciales de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, pues hoy se trata, no de parar la accion de aquellos Tribunales, ni de restituir con recursos judiciales extraordinarios á los ordinarios, sino solo de parar la accion del que inmediatamente ejecuta y tratara de seguir ejecutando actos que violen las garantías del art. 14 de la Constitucion federal, prefiriendo á sus prevenciones, las decisiones anticonstitucionales de jueces incompetentes: Undécimo; Que si aun terminados los juicios de jueces incompetentes, no se pudiera pedir amparo de la garantía del art. 14, ni de otras violadas por los jueces, resultaria que las del hombre y las del ciudadano, no tendrian mas remedio una vez holladas en última instancia, que el de la nulidad y responsa-

Tomo III.—Parte II.

bilidad: Duodécimo; Que esto solo serviria para repararse, pero no para precaverse, y excluiria á la Justicia federal en todos los Estados aun de la jurisdiccion para reparar: Décimotercio; Que no es este el espíritu ni de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, ni el de la ley de 20 de Enero de 1869, art. 1º y 2º, pues los cuatro dichos artículos en relacion los dos últimos con los demas hasta el 7º, lo que quieren es *protejer y amparar* con la oportunidad posible, y por medio de la Justicia federal, mientras los indicados recursos de nulidad y responsabilidad, podrán *reparar*, y no por medio de la autoridad federal, pero no *protejer* y *amparar*, que en las Repúblicas como la nuestra, la Constitucion general es la suprema ley, á que deben subordinarse todas las demas, y que señalando ella la extension y límites de cada uno de los poderes en que está dividida la administracion pública, así de la Union como de los Estados, todo acto que los excede, cualquiera que sea su naturaleza, es ipso jure nulo, como lo enseñan los mas acreditados publicistas; que en ellas el poder judicial de la Federacion es el exclusivamente encargado de conservar ileso la Constitucion general, confrontándola con las leyes y actos de *cualquiera autoridad*, siempre que á ello sea excitada por un particular que crea atacadas en su persona ó intereses, las garantías individuales; no encomendándose tales funciones á los Tribunales de los Estados, porque la variedad de su legislacion y práctica, haria imposible la regularidad y prevision con que debe establecerse el derecho público; y porque además, como dice Toqueville, tom. 1º, pág. 266 “confiar la ejecucion de las leyes de la Union á los Tribunales instituidos por estos cuerpos políticos, seria entregar la nacion á jueces extranjeros y lo que es mas, cada Estado no es solamente un extranjero respectivamente á la Union sino un adversario continuo, puesto que á la So-

beranía de la Union no le cabe poder, sino en provecho de la de los Estados. Por eso haciendo aplicar las leyes de aquella por los Tribunales de estos últimos, se abandonaba la Union no solo á jueces extrañeros, sino además á jueces parciales." Décimocuarto y último; Que en consecuencia, ni el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 citada, que no admite el recurso de amparo en negocios judiciales, puede parar la accion de la Justicia federal, impidiéndose que la ejerzan sobre los ejecutores de las sentencias de jueces incompetentes. Por tales consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por los arts. 1º, 2º y 11 de la ley de 30 de Noviembre de 1861, vijente en la época en que está justificado se promovió este amparo, que ha continuado en el presente juicio; y con fundamento de los arts. 101, 102 y 126 de la Constitucion general; se declara: que la Justicia federal, ampara y protege al C. Manuel José Toro, comisario general de guerra que fué de este Estado, en la garantía del art. 14 de dicha Constitucion general que fué violada por el veredicto del H. Congreso del mismo de fecha 13 de Noviembre de 1868, así como por la resolucion de la Corte de Justicia de 24 de Diciembre del mismo año, en lo relativo al 4º capítulo de acusacion, cuyo conocimiento correspondió á los Tribunales de la Federacion; y por cuanto se ha notado que el ciudadano administrador principal de correos, que fungió en el presente negocio de Promotor fiscal, omitió el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, por lo cual se ha tramitado este juicio, y en atencion tambien á que dicho ciudadano administrador es extraño á los negocios del foro, se le recomienda solamente, que en casos semejantes observe las prescripciones legales del caso en que intervenga. Hágase saber; y publíquese este fallo en cumplimiento del art. 27 de la citada ley

de Enero de 1869, y dese cuenta á la Suprema Corte de Justicia de la nacion para su revision. El C. Lic. José María Monterubio, juez 1º suplente de Distrito de este Estado, definitivamente juzgando así lo sentenció, mandó y firmó. Doy fé.—*José M. Monterubio.*—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de su original, que obra en el juicio respectivo á que me remito. Oaxaca, Octubre 18 de 1872.—*J. Monterubio.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 15 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido en la ciudad de Oaxaca, ante el juez de Distrito del Estado del mismo nombre; por el Lic. D. José María Toro, en representacion de su padre político D. Manuel José Toro, quejándose de que á su representado como tesorero que habia sido de ese Estado, le juzgó la Legislatura en calidad de jurado de hecho, y en seguida la Suprema Corte de Justicia en calidad de jurado de sentencia, ambas autoridades del propio Estado, en la acusacion que el Poder Ejecutivo del mismo le hizo, entre otros capítulos por el 4º, que expresa que en su concepto, se habia adjudicado el quejoso por medio de otras personas, bienes de la nacion, cuya administracion tenia encomendada á consecuencia de las disposiciones relativas que regian en la época á que la acusacion se refiere; cuyos juicios, alega el apoderado del quejoso que violan en la persona de su poderdante, la garantía que otorga el art. 14 de la Constitucion de la República, habiendo invadido la autoridad del Estado, la esfera de la autoridad federal, única que puede conforme á las leyes juzgar á D. Manuel José Toro en la acusacion referida. Vistas las constan-

cias de autos, y considerando: que el capítulo 4º de la acusacion hecha contra el quejoso, y á quien este alude al deducir el presente recurso de amparo, se refiere á hechos cuyo conocimiento corresponde á la justicia federal y no á la del Estado, y que por tal motivo, el haber conocido esta de los hechos referidos y la imposición de pena por ellos importa una violación de la garantía expresa en el art. 14 de la Constitución Federal; con este fundamento y los que con relacion á este punto asienta la sentencia del juez de Distrito de Oaxaca, se decreta: se confirma la referida sentencia en la parte que dice: "La Justicia Federal ampara y protege á D. Manuel José Toro, comisario general de guerra que fué en este Estado, en la garantía del art. 14 de la Constitución general, que fué violada por el veredicto del H. Congreso del mismo, de fecha 13 de Noviembre de 1872; así como por la resolución de la Corte de Justicia de 24 de Diciembre del mismo año, en lo relativo al 4º capítulo de acusacion, cuyo conocimiento correspondió á los tribunales de la federacion."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos menos uno, lo fallaron y decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre 20 de 1872.—*Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por Acacio Buendía, contra el jefe del primer batallón de línea que lo tiene prestando servicios militares en dicho batallón contra su voluntad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que el C. Acacio Buendía se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que consignado al servicio de las armas por el jefe político de Texcoco, fué dado de alta en el batallón núm. 1 el mes de Enero último contra su voluntad, violándose las garantías que concede el art. 5º de la Constitución.

Recibido el juicio á prueba ninguna produjo el quejoso, y aunque alega que es casado y tiene un hijo, ni lo ha justificado ni en esa época existía excepcion alguna para los que se tomaran de leva, pues no se habia expedido la ley de 17 de Mayo que las concedió, y puede considerarse á Buendía como tomado de leva, supuesto que el acto que debe ser calificado por el Juzgado es el que lo dió de alta en el batallón, pues la consignacion de la autoridad de Texcoco no está sujeta á la jurisdiccion del Juzgado que solo es competente para lo que tenga lugar dentro del Distrito, que es únicamente á donde se extiende su competencia.

Por lo expuesto puede declarar el Juzgado, que la Justicia Federal no ampara ni protege á Acacio Buendía.

México, Octubre 2 de 1872.—*Herrera Campos.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado 1º de Distrito de México.—México, Octubre 11 de 1872.—Visto el recurso de amparo promovido por Acacio Buendía, quejándose de que contra su voluntad y con infraccion del art. 5º cons-